

cometer Juana Gonzalez, con el tiempo que estuvo presa.

Por lo expuesto se resuelve:

1º Se revoca la sentencia del juez de Distrito de Zacatecas en la parte que dá por compurgado el delito que intentó cometer Juana Gonzalez, con el tiempo que estuvo en prision.

2º Por intento de circulacion de moneda y reincidencia en el mismo delito, se condena á Juana Gonzalez á sufrir una multa de ocho pesos, abonándosele el peso y diez y ocho centavos que por su cuenta y por este motivo fueron enterados en la jefatura superior de hacienda de Zacatecas, ó un arresto de ocho dias, descontándosele el tiempo equivalente al peso diez y ocho centavos.

3º Se confirman la segunda y tercera proposicion de dicha sentencia, por las cuales se manda inutilizar las monedas aprehendidas, aplicando el metal de que estaban formadas en beneficio de la casa de moneda de Zacatecas, y amonestar á la reo con la solemnidad que manda el Código, para que en lo futuro no vuelva á intentar cometer ese delito.

4º Remítase copia de esta sentencia, de la de primera instancia y de los pedimentos del ministerio público, al *Semanario Judicial*.

5º En caso de conformidad, ejecútese y dése cuenta con esta causa á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

(Firmados.)—*Juan Robles Martinez*.—*Tomás Bravo*, secretario.

Es copia que certifico.—*Guadalajara*, 21 de Agosto de 1874.—*Tomás Bravo*, secretario.

Pedimento del O. Procurador general de la Nacion.

El procurador general dice: que en virtud de las diligencias mandadas practicar por esta sala, en el juzgado de Distrito de Zacatecas, resulta que la sentencia del tribu-

nal de Circuito del Estado de Jalisco, causó ejecutoria por no haberse interpuesto recurso alguno por las partes. En consecuencia, el que suscribe, despues de haber visto la causa, pide: que se declare no haber mérito para exigir la responsabilidad á los jueces que de ella conocieron, mandándose archivar el Toca y remitir las actuaciones al tribunal de su procedencia.

México, Diciembre 14 de 1874.—*Lozano*.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 21 de 1875.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Febrero 12 de 1875.—*Gómez Eguarte*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido por Antonio García ante el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas, contra la jefatura política de la misma ciudad que lo condenó á la última pena juzgándolo como plagiario.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

Antonio García patrocinado por el C. Lic. Regino Villalobos, con fecha 31 de Agosto último solicitó el amparo de la justicia federal, por haber sido sentenciado á muerte en pena de un delito, en su concepto, no comprendido en el art. 23 de la Constitucion, y esto como resultado de un juicio en

parte sustanciado por autoridad incompetente, contra lo prevenido en el art. 14 de la misma carta fundamental de la República.

Aprehendido el quejoso en la capital del vecino Estado de San Luis, la gefatura política de esta ciudad, procedió en su contra por complicidad en el delito de plagio del niño Francisco Noriega, comenzando el juicio los CC. Basilio Moreno y Cruz G. Rojas, sustitutos del C. Trinidad Acuña, jefe político Constitucional del partido, á quien se notificó la suspensión provisional del acto reclamado, resuelta solo en virtud del escrito en que se interpuso el recurso, conforme á lo dispuesto en la última parte del art. 5º y con fundamento del 6º de la ley de 20 de Enero de 1869.

El C. Acuña restituido en su empleo el día 22 de Agosto último, á consecuencia de la ejecutoria de 6 de Julio anterior, fué suspendido segunda vez, remplazándolo desde el día 2 del presente mes, el mencionado C. García Rojas, quien al rendir el informe relativo, se declara incapáz para juzgar sobre las facultades con que procediera el Congreso general, al expedir la ley de 3 de Mayo de 1873, sosteniendo la competencia con que sustanció parte de la acta levantada contra García, puesto que en casos análogos está reconocida la legitimidad de su nombramiento, hecho conforme á la ley del Estado fecha 6 de Noviembre de 1871.

La declaración del art. 2 de la precitada ley de 3 de Mayo de 1873, nada añade al texto constitucional del soberano Congreso y de los tribunales federales, autoridades competentes para interpretarlo como lo han hecho á esto respecto, sin duda alguna de acuerdo con las prescripciones de la justicia y de la razón, pues será un verdadero contrasentido eximir de la pena de muerte el atroz delito de plagio, mientras en nombre de la ley se priva de la existencia, por ejemplo, al pirata, al salteador, al incendiario ó al homicida, cuyos crímenes á pesar de su gravedad intrínseca, causan menos alarma, puesto que el plagio no es mas que

un acto de piratería ó un atentado de salteadores con circunstancias agravantes, como se sostuvo por las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales, al discutirse la iniciativa que el Ministerio de gobernación presentó al Congreso general en 18 de Diciembre de 1868.

Pero si en vano se invoca el art. 23 del pacto federal para eludir la pena de muerte impuesta á García, como esto dice haber justificado que no es reo del delito que se le atribuye, en cuyo caso no está comprendido en la precitada ley de 3 de Mayo del anterior año, que al suspender varias garantías individuales exclusivamente para los salteadores y plagiarios, supone la prueba sobre la existencia de estos delitos, muy conducente será aclarar la duda que á este particular se presenta, usando al efecto de la facultad establecida en el art. 10 de la ley orgánica antes citada, atendiendo á la gravedad de los hechos que motivan el presente recurso.

Sin embargo, como corresponde al Sr. Juez resolver sobre el particular, el que suscribe, para cumplir con lo dispuesto en la última parte del art. 9 de la misma ley, debe añadir, que el silencio del C. Cruz G. Rojas respecto á la ingerencia que le atribuye el quejoso en la averiguación, transcurridos dos meses que legítimamente debió durar la suspensión del jefe político constitucional, confirma el hecho, de donde se infiere la violación de la garantía consignada en el art. 14 de la carta fundamental de la República, puesto que siendo arbitraria la suspensión del C. Trinidad Acuña, en cuanto excedió de determinado tiempo, cumplido el que debió durar, fué también arbitraria la permanencia de su sustituto, no obstante la facultad que al gobierno del Estado concede el decreto de 6 de Noviembre de 1871; pudiéndose concluir, que un particular ejerciendo de hecho las facultades de jefe político del partido, no forma el tribunal previamente establecido por la ley para juzgar á los salteadores y plagiarios.

Tales antecedentes hacen, que el Promotor pida se declare: que la Justicia de la Union ampara y protege á Antonio García, contra la sentencia pronunciada en su contra á consecuencia de un procedimiento en que se infringió una de las garantías de que habla la última parte del art. 14 de la Constitucion federal de los Estados Unidos Mexicanos. Zacatecas, 6 de Setiembre de 1874.—*Eduardo G. Pankhurst.*

Otro pedimento fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito.

Conforme á lo dispuesto en el art. 10 de la ley orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, el juzgado tuvo á bien recibir á prueba por el término de ocho dias, el juicio de amparo promovido por Antonio García, sentenciado el dia 28 de Agosto último, á sufrir la pena de muerte por complicidad en el plagio del niño Francisco Noriega, mandando que se presentara la causa original formada por la jefatura política de esta capital y se agregara copia certificada de la sentencia que la Suprema Corte de Justicia pronunció en el juicio de amparo promovido por el C. Trinidad Acuña contra el Supremo gobierno del Estado, que lo suspendió en el ejercicio de las funciones de jefe político de este partido.

Con el primer objeto se ofició á la jefatura y luego por tres veces consecutivas al Supremo gobierno, que habiendo ofrecido mandar copia de la causa, por fin se cesó de hacerlo pretestando su carácter de reservada, contra lo dispuesto en el art. 12 de la ley de 20 de Enero de 1869, privándose así al actor del medio directo de justificar que diez y ocho testigos demostraron su inocencia respecto del delito que se le atribuye, y por el que en parte fué juzgado por el C. Cruz G. Rojas, quien indebidamente desempeñó el encargo de jefe político interino despues del dia 30 de Mayo

último; esto es, cumplidos los dos meses que legítimamente pudo estar suspenso el C. Trinidad Acuña, segun la parte expositiva de la sentencia de 6 de Julio, cuya copia certificada obra á fojas 11 del expediente.

De las demas pruebas rendidas por Antonio García, solo aparece justificado:

1º: Que el jefe político constitucional suspendido en 30 de Marzo del corriente año fué repuesto en su empleo hasta 22 de Agosto último.

2º: Que el C. Cruz G. Rojas, como sustituto del Sr. Acuña, confiesa haber sido juez de averiguacion en la causa instruida á García, á quien tuvo incomunicado durante el tiempo que de ella conoció.

3º: Que terminada la misma causa por sentencia pronunciada en 28 de Agosto último, en 29 y 30 del mismo mes, se solicitó indulto, fundándose en la falta de prueba del delito, sin que la acta se haya publicado conforme lo dispone el final de la ley de 3 de Mayo de 1873, y

4º: Que en concepto del accesor voluntario de la jefatura política, lejos de resultar probado que García tuvo participio en el plagio, superabundantemente demostró su inocencia.

Ya en el pedimento de 6 del corriente mes se manifestaron las razones que existen para creer que no proceda el amparo por violacion del art. 23 del pacto federal, puesto que el art. 2º de la ley contra salteadores y plagiarios, nada añade al texto constitucional, limitándose á declarar que en él está comprendido el delito de plagio; por tanto, queda solo por examinar si por no haberse presentado la acta formada por la jefatura, la negativa del gobierno unida á la falta de publicidad de aquella y á la declaracion del C. Lic. Ignacio R. Ibarrola, son suficientes datos para concluir que se han violado en la persona del quejoso las garantías suspendidas exclusivamente para los salteadores y plagiarios; y si constandingo

que el C. Cruz García Rojas formó parte de la averiguación, transcurridos los dos meses que debió durar la suspensión del jefe político constitucional, resulta que Antonio García no fué juzgado por el tribunal previamente establecido por la ley.

Es sensible que el supremo gobierno del Estado eludiendo el cumplimiento de la ley un deber ponga á la autoridad judicial en el extremo de determinar su juicio por datos que puedan inducirlo á error; pero en defecto de las constancias relativas á la culpabilidad ó inocencia del quejoso, en el plagio que motivó el procedimiento en contra suya, la justicia federal encargada de hacer respetar las garantías del hombre, tiene el derecho de saber si existe el motivo que en determinado caso autoriza la suspensión; y cuando él no aparece suficientemente comprobado, le asiste el indeclinable deber de protegerlas, porque no debe presumirse la infracción de la ley, y en materia criminal la aplicación de ella debe ser en caso de duda, favorable al presunto reo: *Dolus non praesumitur nisi probetur. In dubiis benigna interpretatis fieri debet.*

Y esta doctrina que pudiera parecer avanzada con referencia al presente caso, por existir una sentencia condenatoria, no es sino muy oportuna atendiendo á que precisamente se trata de saber si aquella recae sobre el hecho excepcional á que se refiere el juicio que le precede, mas cuando la infundada negativa de los autos, el parecer del accesor y la falta de la publicidad, prescrita sin duda como correctivo de los abusos que pueden cometerse á la sombra de un procedimiento excepcional, dan motivo á sospechar sobre la justificación del fallo, no precisamente porque se obre con malicia, sino porque puede incurrirse en equivocaciones al perseguir con exagerado celo á los autores de un crimen que conmovió á la sociedad con muy justa causa. Si pues no consta que Antonio García es plagario, para él no pueden considerarse suspensas las garantías de que hablan la primera parte

del art. 13, la parte primera del art. 19 y los arts. 20 y 21 de la Constitución federal.

En cuanto á la parte que el C. Cruz G. Rojas tomó en la averiguación, confesada por él mismo y siendo quince días el término legal para formar el juicio, este debió dar principio en los últimos días de la primera quincena de Agosto, puesto que fué sentenciado el 28 del mismo mes, seis días después de repuesto en su empleo el jefe político constitucional; y como su suspensión fué legítima solo hasta el 30 de Mayo, el gobierno al extralimitar la 7ª de las atribuciones que le concede el art. 39 de la Constitución política del Estado, y la facultad del 103 del reglamento económico-político vigente, creó un tribunal especial, porque el establecido previamente por la ley lo formaba la autoridad política que debía estar funcionando conforme á ella, opinar de otro modo sería acabar con la independencia entre los Poderes Judicial y Ejecutivo, poniendo el primero á disposición del segundo, que á su arbitrio podría cambiar el personal del juez designado por la ley de 3 de Mayo de 1873.

Por tales consideraciones, el Promotor, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución y ley de 20 de Enero de 1869, concluye pidiendo se declare: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Antonio García contra la sentencia que lo condena á muerte como plagario, porque no habiendo prueba de que sea reo de tal delito y habiéndosele juzgado en parte por persona que legítimamente no desempeñaba las funciones de jefe político del partido, se violaron en su persona las garantías consignadas en la primera parte del art. 13 y última del art. 14 de la Constitución política de la República.

Zacatecas, Setiembre 30 de 1874.—
Eduardo G. Pankhurst.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, 7 de Octubre de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por Antonio García patrocinado por el C. Lic. Regino Villalobos, contra la jefatura política de la Capital, que lo sentenció á la pena de muerte por el plagio del niño Francisco Noriega; y además por haber sido juzgado por el C. Cruz García Rojas, nombrado jefe político interino durante la suspensión arbitraria del C. Trinidad Acuña, jefe político constitucional; considerando el quejoso vulneradas en su persona las garantías que protegen los arts. 23 y 14 de la Constitución general: Visto el auto sobre la suspensión provisional; el informe de la autoridad ejecutora; el pedimento del ciudadano promotor fiscal; las pruebas promovidas; los alegatos de las partes y la citación para sentencia.

Considerando: primero, que la ley de 10 de Abril del presente año, que prorogó la de 2 de Mayo de 1873, no es anticonstitucional, porque no es una adición y reforma constitucional, sino una aclaración hecha por la autoridad legislativa en uso de sus facultades legítimas.

Segundo: que las citadas leyes de 2 de Mayo y 10 de Abril, se han dictado por el Congreso de la Unión no solo conforme á sus atribuciones ordinarias, sino por las que emanan del art. 29 de la Constitución general, por el conflicto ó peligro en que ha puesto á la sociedad el delito de plagio; así como en otras veces se ha hecho por los delitos políticos, reviviendo la ley de 6 de Diciembre de 1856, sin que se haya considerado este procedimiento como una adición al art. 23 de la Constitución, ni un aumento constante y permanente en el número de los delitos en que el Código fundamental permite imponer la pena de muerte á sus autores.

Tercero: que bajo esta recta inteligencia y en cumplimiento del art. 126 de la Constitución general, todos los poderes de la fe-

TOMO VII.—PARTE II.

deración y de los Estados han acatado debidamente las leyes de 2 de Mayo y 10 de Abril, aplicándose generalmente, lo que no habría sucedido si ellas hubieran sido juzgadas como anticonstitucionales, por todo lo que, no puede considerarse que se ha violado en la persona de Antonio García la garantía que protege el art. 23 de la Constitución general.

Cuarto: "que si bien la autoridad judicial federal en el conocimiento que la ley le encomienda de los juicios de amparo, en general no es de sus atribuciones revisar los actos de las demás autoridades que deben ser independientes en el ejercicio de sus cargos, no debe entenderse así cuando la violación de que se trate sea inherente á la competencia que ejercita la autoridad responsable; ó á la calificación del delito en su esencia ó circunstancias determinantes, lo que acontece con la ley vigente sobre saltadores y plagiarios, pues prescribiendo esta la suspensión en el goce de varias garantías individuales, escepcion expresamente destinada tan solo para ciertos y determinados casos y personas, es indudable que para la secuela y resolución de un juicio de amparo como el presente, que se entabla nada menos que á fin de patentizar no hallarse el quejoso comprendido en la ley, y que debe gozar de las garantías suspensas por ella, corresponde ante todo al juez federal inquirir, y le compete calificar, si el delito es ó no de los designados por la ley, y si el quejoso es juzgado ó no con tal carácter, calificación que se hace indispensable verificar con vista y revisión del respectivo proceso ó de los justificantes que á la autoridad responsable se hayan pedido ó esta exhiba con su informe."

Quinto: que por estas razones, y habiendo alegado Antonio García la falta de comprobación del cuerpo del delito, incompetencia por ilegitimidad en el juez de averiguación, falta de libertad en su defensa, su inocencia justificada por diez y ocho testi-

gos contra el testimonio de cinco personas que declararon de oídas, y la falta de comprobación de la identidad de la persona acusada, por haber muchos hombres que tienen un mismo nombre, era preciso pedir el proceso que se formó á Antonio García.

Sexto: que el supremo gobierno del Estado se ha resistido á cumplir con el decreto del juzgado, por el cual se le pidió la causa, siendo esta providencia mas necesaria por no haberse cumplido con la ley, omitiéndose publicar en el *Diario Oficial* la sentencia pronunciada contra Antonio García y el acta ó proceso que se formó; resultando de la conducta del gobierno, una desobediencia punible de la ley de 20 de Enero de 1869, y una infracción injustificable de la parte final del art. 39 de la ley de 2 de Mayo de 1873, redundando la desobediencia ó infracción expresadas, en perjuicio de la sociedad y del quejoso en este juicio, por la falta de los datos necesarios para sentenciar, y la impunidad del delincuente, si hubiese razon para aplicar la ley.

Sétimo: que si bien el juzgado no se considera competente para formar causa á los ciudadanos encargados del gobierno del Estado por desobediencia de la ley de 20 de Enero de 1869 y la infracción de la de 2 de Mayo citada, por el fuero constitucional de que disfrutan, ni cree que se deben promover conflictos por estas causas, tampoco debe dejarlas pasar desapercibidas.

Octavo: que la resistencia del supremo gobierno del Estado para remitir original ó en copia el proceso formado al quejoso, y las pruebas que este ha promovido, dan lugar á creer, que son justos y fundados los motivos en que apoya la violación de la garantía del art. 14 de la Constitución general, y de que no es aplicable en su persona la ley de 10 de Abril del presente año; y ademas, que el juicio que se le ha formado, adolece de todos los vicios que se le tachan, no resistiendo su publicación el exámen de la opinion pública comparándolo con la ley.

Noveno: que declarada por la Suprema

Corte de Justicia, arbitraria la suspensión del C. Trinidad Acuña, pasados los dos meses que permite el reglamento económico-político de 5 de Mayo de 1852, ningún nombramiento pudo hacerse por el gobierno del Estado con el carácter de legítimo, no obstante el decreto de la legislatura del Estado fecha 6 de Noviembre de 1871, que le concede la facultad de nombrar interinos, porque debió llamar al jefe político constitucional para que se hiciera cargo de la jefatura, no teniendo el C. Acuña ni licencia, ni impedimento para estar separado de su empleo de nombramiento popular, que diera lugar al ejercicio de la facultad de nombrar un interino, no siendo la arbitrariedad causa legítima para ello.

Décimo: que suspensas algunas garantías para los plagiarios, no debe hacerse por su condicion, extendiéndose la suspensión á otras garantías que quedaron ilicas, como son la que protege el art. 14 y la que se refiere á la libertad de la defensa, en la que se comprende el derecho de recusar y de exigir, que para ser sentenciado y condenado, haya prueba plena y perfecta de la culpabilidad, así como de la comprobación de cuerpo del delito, segun lo exige la misma ley de 10 de Abril de 1873.

Undécimo: que de los anteriores considerandos, de las pruebas promovidas por el quejoso y especialmente de la declaración rendida por el C. Lic. Ignacio Rios é Ibarrola, asesor voluntario que fué nombrado por el C. jefe político Trinidad Acuña, así como por los pedimentos y alegatos del quejoso y del ciudadano promotor fiscal, resulta plenamente demostrada la violación de la garantía que protege el art. 14 de la Constitución general; conforme á lo dispuesto en los arts. 101 y 102 de dicho Código, á la ley de 20 de Enero de 1869 y lo pedido por el ciudadano promotor fiscal, sentenciando definitivamente este juicio, el juzgado declara:

1º La Justicia de la Union no protege ni ampara á Antonio García, por haber sido

condenado á muerte por el delito de plagio, y no haberse vulnerado en su persona la garantía que protege el art. 23 de la Constitución general, por no ser anticonstitucionales las leyes de 2 de Mayo de 1873 y 10 de Abril del presente año.

2º La Justicia de la Union ampara y protege á Antonio García, por no estar comprendido en las leyes citadas, y habérsele formado causa por juez incompetente, debiendo haberlo sido el ciudadano jefe político constitucional, vulnerándose en su persona la garantía que protege el art. 14 de la Constitución general, habiéndose formado la causa por un juez incompetente por no existir la razon del decreto de 6 de Noviembre de 1871 al ser nombrado jefe político interino el C. Cruz García Rojas.

3º Concluida la revision de este juicio por la Suprema Corte de Justicia, sáquese testimonio de lo conducente, para exigir la responsabilidad de los ciudadanos gobernadores del Estado, por la infraccion de las leyes de 20 de Enero de 1869, 2 de Mayo del presente año y 10 de Abril de 1873, ante el Congreso de la Union.

4º Hágase saber, publíquese esta sentencia en el *Diario Oficial* del Estado, sáquense las copias respectivas para el *Semanario Judicial* y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia. El ciudadano juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó.—Doy fé. Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico.—Zacatecas Octubre 8 de 1874.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 10 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por Antonio García ante el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas, contra la jefatura política de la misma ciudad que lo condenó á la última pena, juzgándolo como

plagiario, con cuyo acto reputa el quejoso violadas en su persona las garantías que consigna la carta fundamental en sus arts. 14 y 23, en virtud de que el ciudadano jefe político que le instruyó el proceso, no desempeñaba legalmente las funciones de tal autoridad, por haber sido nombrado durante la suspension arbitraria del jefe político constitucional, y haber omitido en la formacion de la causa, todos los requisitos que la misma ley señala. Visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado; el auto en que se pidió por el juzgado la causa original, y la negacion del gobierno del Estado para remitirla; el pedimento del ciudadano promotor fiscal; lo alegado por el promovente, la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y ver conviene, y

Considerando: que respecto de la resistencia ó negacion del gobierno del Estado á obsequiar las determinaciones del Juzgado de Distrito, ya el mismo ciudadano juez inició en su sentencia el procedimiento legal, y con fundamento de los arts. 14, 16, 101 y 102 constitucionales, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma por sus propios y legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito referido en 10 de Setiembre próximo pasado, que declaró:

Primero: Que la Justicia de la Union no protege ni ampara á Antonio García, por haber sido condenado á muerte por el delito de plagio y no haberse vulnerado en su persona la garantía que protege el art. 23 de la Constitución general, por no ser anticonstitucionales las leyes de 2 de Mayo de 1873 y 10 de Abril del presente año.

Segundo: La Justicia de la Union ampara y protege á Antonio García, por no estar comprendido en las leyes citadas y habérsele formado causa por juez incompetente, debiendo haberlo sido por el ciudadano jefe político constitucional, vulnerándose en su persona, la garantía que protege el art. 14 de la Constitución general, habiéndose

dose formado la causa por un juez incompetente, por no existir la razon del decreto de 6 de Noviembre de 1871, al ser nombrado jefe político interino el C. Cruz García Rojas.

Devuélvansé estas actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos respecto del primer punto, y por unanimidad respecto del segundo, lo decretaron y firmaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 31 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por el C. Lic. Rafael Pescador en representacion de D. Juan N. Flores y Quijar, contra los cobros que le hace el recaudador de contribuciones de Cuencamé, á título de impuestos ordinarios causados por la fábrica de tejidos «Guadalupe» del Peñon Blanco, y por las contribuciones extraordinarias establecidas en 14 de Abril del presente año.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El administrador de correos, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que este es el

mismo caso y se versa la misma cuestion que en los autos promovidos por los Sres. Castillo Hermanos y otros causantes de la contribucion, en los que el Juzgado de Distrito ha fallado ya, otorgando el amparo á los quejosos. Sin embargo: como está pendiente de revision ante la Suprema Corte de Justicia aquel fallo del juzgado, respectable por mil títulos, el fiscal no puede cambiar su pedimento que corre en los autos pendientes de revision, y por lo mismo le dá por reproducido en el presente caso. Fundado pues en las razones que espuso en aquel juicio y que en lo sustancial fueron publicadas en el periódico oficial del Estado, núm. 60, concluye pidiendo tambien en esta ocasion, se deniegue el amparo que solicita el C. Juan Nepomuceno Flores y Quijar.

Durango, Setiembre 9 de 1874.—*Arcadio Herrera.*—Una rúbrica.

Es copia. Durango, Setiembre 9 de 1874.—*Arcadio Herrera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Octubre 15 de 1874.

Por presentada y atendida la solicitud que en él se contiene, se le dá por desistido del amparo que solicitó en cuanto al cobro de la contribucion extraordinaria decretada el 14 de Abril del corriente año.

Y respecto del segundo punto que abraza la solicitud defecha 19 de Junio del corriente año y que dió motivo al presente recurso, constando de autos plenamente probado: que la junta cuotizadora al hacer su calificación contra la que se ha interpuesto la queja á que se refiere este juicio, no llenó en manera alguna las prescripciones que le demarcan las leyes hacendarias vigentes en el Estado.

Que por otra parte, consta tambien por las informaciones presentadas, que no existe el capital de cuya base se parte para cobrar las contribuciones ordinarias, en el